

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N.º 0471-2021-MDSR/A, emitida por el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Rafael; los Oficios N.º 235-2023-MDSR/A, N.º 110-2023-MDSR/GM y N.º 117-2023-MDSR/GM, emitidos por la Municipalidad Distrital de San Rafael; el Informe N.º D000821-2023-JUS/PGE-DIR, emitido por la Dirección de Información y Registro; el Informe N.º D000898-2023-JUS/PGE-DAJP, emitido por la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal; y el Informe N.º D000885-2023-JUS/PGE-OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley;

Que, conforme al segundo párrafo del artículo 29 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley N.º 31433, las procuradurías públicas municipales son parte del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, se encuentran vinculadas administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado y se rigen por la normativa vigente en la materia;

Que, mediante el Decreto Legislativo N.º 1326 se reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del Estado, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones;

Que, los artículos 4 y 10 del Decreto Legislativo N.º 1326 definen el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el Procurador General del Estado, los procuradores públicos y demás funcionarios o servidores ejercen la defensa jurídica del Estado, siendo la Procuraduría General del Estado la entidad competente para regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de los intereses del Estado, a cargo de los procuradores públicos;

Que, los numerales 27.1 y 27.2 del artículo 27 del Decreto Legislativo N.º 1326, modificado por la Ley N.º 31778, establecen que el procurador público es el funcionario que ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional. Por su sola designación, le son aplicables las disposiciones que corresponden al representante legal y/o al apoderado judicial, en lo que sea pertinente; además, mantiene vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Procuraduría General del Estado, salvo los exceptuados en el artículo 24 de la citada norma, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones. En el desempeño de sus funciones, actúan con autonomía e independencia en el ámbito de su competencia;

Que, según el numeral 8 del artículo 19 del Decreto Legislativo N.º 1326, el Procurador General del Estado tiene, entre otras funciones, la de encargar la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, cuando así se requiera, a otro procurador público del mismo nivel;

Que, mediante Decreto Supremo N.º 018-2019-JUS se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1326, con la finalidad de optimizar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, garantizando el desarrollo efectivo de las actividades desplegadas por los operadores en beneficio de los intereses del Estado;

Que, el numeral 4 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1326 establece que es función de la Procuraduría General del Estado velar por el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado, aplicando los mecanismos que sean necesarios para ello y dentro del ámbito de sus competencias;

Que, mediante Resolución N.º D000344-2023-JUS/PGE-PG, se formaliza la aprobación de la Directiva N.º 002-2023-JUS/PGE-CD, denominada "*Directiva que establece los procedimientos para encargar la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, y para la entrega y recepción de cargo dentro de las Procuradurías Públicas*" (en adelante, la Directiva), en cuyo numeral 8.1 se establece que la encargatura procede ante la ausencia temporal o el cese de la función del procurador público, a efectos de garantizar la defensa jurídica de los intereses del Estado; así como mantener la operatividad de la procuraduría pública;

Que, adicionalmente, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la citada Directiva establece que cuando la entidad no cuente con procuraduría pública o procurador público, o cuando así lo amerite el caso, la encargatura se efectúa conforme a lo establecido en el numeral 9.1 de la Directiva, en virtud a la cual otro procurador público del mismo nivel asume temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado;

Que, asimismo, el numeral 9.1.5 de la Directiva dispone que, en base a la información remitida por la Dirección de Información y Registro, la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal elabora su informe técnico recomendando a un procurador público del mismo nivel para la encargatura considerando, entre otros criterios, el de "*carga procesal*" y "*ubicación geográfica*";

Que, finalmente, la Primera Disposición Complementaria Final de la mencionada Directiva establece que "*la encargatura concluye con la designación de un/a nuevo/a procurador/a público/a o cuando se produzca algún otro supuesto que impida seguir ejerciendo la encargatura*";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N.º 0471-2021-MDSR/A, de fecha 09 de noviembre de 2021, se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Rafael al abogado Herlis Toribio Arosemena Tarazona;

Que, mediante Oficios N.º 235-2023-MDSR/A, N.º 110-2023-MDSR/GM y N.º 117-2023-MDSR/GM, la Municipalidad Distrital de San Rafael solicita se atienda la renuncia del abogado Herlis Toribio Arosemena Tarazona a la encargatura otorgada en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la referida municipalidad, lo cual amerita se evalúe el inicio de acciones para asegurar la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Rafael;

Que, conforme se precisa en el numeral 4.21 del Informe Técnico Jurídico N.º 035-2023-JUS/PGE-DTN emitido por la Dirección Técnico Normativa, el Procurador General del Estado es el facultado a culminar las encargaturas que se dispusieron mediante actos administrativos dictados por otras autoridades como alcaldes o gobernadores regionales, —hasta el 6 de marzo de 2022, cuando tenían facultades y competencias para hacerlo—, sin importar su calificación —ya se hayan denominado "designación temporal", "encargo

temporal”, “designación con carácter excepcional y temporal” u otra de naturaleza análoga que no impliquen propiamente una designación como titular en la función o cargo—, se asimilan, equivalen u homologan al encargo de funciones regulado en el numeral 8 del artículo 19 del Decreto Legislativo N.º 1326, concordante con el numeral 11 del artículo 11 del reglamento del citado decreto legislativo;

Que, con el documento de vistos, la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal emite su informe técnico en el que concluye que, en el marco de lo dispuesto en la Primera y Cuarta Disposición Complementaria Final de la Directiva, resulta necesario dar por culminada la encargatura dispuesta por la Resolución de Alcaldía N.º 0471-2021-MDSR/A, por los fundamentos que se detallan en el Informe N.º D000898-2023-JUS/PGE-DAJP; y, en consecuencia, invocando el supuesto previsto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Directiva, es decir, cuando la entidad no cuente con procurador público, considera necesario encargar temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Rafael —por los criterios de carga procesal y ubicación geográfica— al abogado Christian Jonathan Mejía Bernal, procurador público de la Municipalidad Provincial de Ambo, en tanto se designe a su procurador público titular;

Que, mediante documento de vistos, la Dirección de Información y Registro emite su informe de verificación concluyendo que ha corroborado que el abogado Christian Jonathan Mejía Bernal, procurador público de la Municipalidad Provincial de Ambo, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 30 del Decreto Legislativo N.º 1326, en el marco del procedimiento para la encargatura de la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Rafael;

Que, a través del informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que resulta legalmente viable la emisión del acto resolutivo recomendado por la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, al ser una atribución propia del Procurador General del Estado emitir dicho acto conforme a la normativa vigente;

Con los vistos de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, de la Dirección de Información y Registro, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.º 1326 que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, por su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 018-2019-JUS y por la Directiva N.º 002-2023-JUS/PGE-CD, denominada “*Directiva que establece los procedimientos para encargar la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, y para la entrega y recepción de cargo dentro de las Procuradurías Públicas*”, cuya aprobación fue formalizada por la Resolución N.º D000344-2023-JUS/PGE-PG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conclusión de encargatura

Dar por concluida la encargatura temporal de la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Rafael, al abogado Herls Toribio Arosemena Tarazona dispuesta con Resolución de Alcaldía N.º 0471-2021-MDSR/A.

Artículo 2.- Encargatura

Encargar temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Rafael al abogado Christian Jonathan Mejía Bernal, procurador



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría
General del Estado

PROCURADURIA
GENERAL

público de la Municipalidad Provincial de Ambo, en tanto se designe a su procurador público titular; conforme a las consideraciones señaladas en la presente resolución.

Artículo 3.- Notificación

Disponer que la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Gerencia General notifique la presente resolución al abogado Herls Toribio Arosemena Tarazona, a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Rafael, a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Ambo, a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Rafael, y a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Ambo; así como a la Dirección de Información y Registro de la Procuraduría General del Estado, para el registro correspondiente.

Artículo 4.- Publicación

Disponer la publicación de la presente resolución en los Portales Institucional (www.gob.pe/procuraduria) y de Transparencia de la Procuraduría General del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado digitalmente
JAVIER ALONSO PACHECO PALACIOS
PROCURADURIA GENERAL
Procuraduría General del Estado